

C.A. de Santiago

Santiago, dieciséis de marzo de dos mil veintidós.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones:

1.- Se elimina el considerando vigésimo.

2.- En el fundamento vigésimo segundo, se elimina la parte que comienza: “...,sólo en cuanto se condena...”, y hasta “...por concepto de daño moral...”.

Y teniendo en su lugar, y además, presente:

Primero: Que, apela el Fisco de Chile, de la sentencia que rechazó las excepciones de reparación integral y de prescripción deducidas y acogió parcialmente la demanda, condenándolo a pagar la suma de \$70.000.000 por daño moral para cada uno de los actores, con excepción de don David Chávez Valdivia, suma que se deberá reajustar de acuerdo a la variación del IPC entre la fecha de la notificación de la demanda y su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables, aplicados entre la fecha del presente fallo y su pago efectivo, sin costas.

□ En su recurso de apelación, argumenta, en síntesis, que yerra la sentencia en cuanto desestimó la excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada por preterición legal de los demandantes, madre e hijos de la víctima, para sustentar su alegación, reitera los argumentos dados al contestar la demanda de autos. Por otra parte, argumenta respecto a la excepción de prescripción de la acción opuesta por su parte, la que debió ser acogida, por las razones que expresa. Como tercer agravio, cuestiona el monto dado por concepto de indemnización por daño moral.

Pide que se enmiende con arreglo a derecho la sentencia impugnada revocándola y declarando que se rechaza íntegramente la demanda interpuesta de autos acogiendo alguna de las excepciones opuestas; en subsidio, que se rebaje sustancialmente el monto fijado a título de indemnización por daño moral.

Segundo: Que, la demandante se adhiere al recurso deducido, impugnando la decisión en cuanto al quantum de la indemnización por daño moral fijada para los actores, solicitando esta sea elevada a una suma superior; respecto del rechazo de la demanda del actor David Chávez Valdivia, quien no es hijo consanguíneo de don Juan

Carlos Díaz Fierro, pero puede ser considerado como su hijo putativo, conforme al mérito de los antecedentes y probanzas rendidas en el proceso.

Pide que se revoque la sentencia en cuanto por ella desestimó la demanda de don David Chávez Valdivia y en su lugar se acoja disponiéndose el pago de una indemnización por daño moral a su respecto y que se eleve el monto de la indemnización regulada respecto de los demás actores.

Tercero: Que, en cuanto a la excepción de prescripción opuesta cabe consignar, como lo ha establecido de manera casi uniforme la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que tratándose de delitos como los investigados, que la comunidad internacional ha calificado como de lesa humanidad, la acción civil deducida en contra del Fisco tiene por objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de un agente del Estado, conforme fluye de los tratados internacionales ratificados por Chile y de la interpretación de las normas de derecho interno, en conformidad a la Constitución Política de la República.

En efecto, este derecho de las víctimas y sus familiares encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y la consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política.

Cuarto: Que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. En el caso en análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado, con intervención de agentes estatales durante un período de extrema anormalidad institucional en el que representaban al gobierno de la época, y en que -al menos en el caso de autos- claramente se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como el que aquí se estudia, el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda de jure. A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición

constitucional, le son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas, página 231).

De esta forma, el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política de la República que señala que *“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”*.

El artículo 6 de la misma Carta Fundamental, al igual que la disposición antes referida, forma parte de las “Bases de la Institucionalidad” -por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción- y ordena que *“Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”*, indicando el deber categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución. El mismo artículo 6 enseña que *“los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”*, y concluye señalando que *“la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”*.

De este modo, en el presente caso no resultan atinentes las disposiciones de derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, invocadas por el Fisco de Chile, al estar en contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que

protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile.

Quinto: Que de lo que se ha venido señalando se desprende que el Estado está sujeto a la regla de la responsabilidad, que no es extraña a nuestra legislación, pues el artículo 3 del Reglamento de La Haya de 1907 señala que *“La parte beligerante que viole las disposiciones de dicho Reglamento será condenada, si hubiere lugar, a pagar una indemnización. Será responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen su ejército”*. Complementa lo anterior el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto señala que *“Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violadas podrán interponer un recurso efectivo”*, recurso que supone el derecho a buscar y conseguir plena reparación, incluida restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. En este contexto encontramos el principio 15 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados por la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005, el cual señala que *“Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario”*.

En síntesis, la reparación es una obligación que pesa sobre el Estado que ha violado los derechos humanos de sus ciudadanos, deber que es parte del estatuto jurídico de Chile, conforme se viene señalando.

Sexto: Que, en suma, pesando sobre el Estado la obligación de reparar a la víctima y sus familiares consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. No sólo por lo ya expresado sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno. En efecto, el sistema de responsabilidad del Estado deriva además del artículo 3º de la Ley N° 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad; y, consecuentemente con ello, en su artículo 4° dispone que *“el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*. Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad en que se funda la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado.

Consecuentemente, el tribunal a quo decide correctamente al desestimar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile.

Séptimo: Que, en cuanto a las alegaciones de preterición y el haber sido reparados satisfactivamente los actores con anterioridad, estos sentenciadores, comparten los argumentos dados por el tribunal a quo para desestimarlos.

Octavo: Que, en relación al quantum de las indemnizaciones fijadas por la sentenciadora de primer grado, que aparece cuestionado el Fisco de Chile, y por los actores, cabe consignar que en la regulación del resarcimiento, es conocida la dificultad que existe para determinar cuantitativa y económicamente la compensación del daño moral. Empero, en la necesidad de efectuar su valoración y ante la falta de baremos estadísticos o técnicos suficientemente afianzados, cabe acudir a parámetros que puedan servir como criterios orientadores para esos fines, inspirados en consideraciones de prudencia, de equidad y de experiencia. De esa manera, en la medida de lo posible, ha de propenderse a la consideración de los datos objetivos –los hechos probados– la naturaleza del daño y a la búsqueda de algún grado de proporcionalidad entre la entidad de ese daño y la suma a indemnizar.

Noveno: Que siguiendo esta línea argumental, en lo tocante a las sumas pretendidas por concepto de daño moral, lo cierto es que de los antecedentes de autos aparece que efectivamente ha sido acreditado el daño moral sufrido por don Juan Carlos Díaz Valdivia y don Alex Díaz Valdivia, hijos de don Juan Carlos Díaz Fierro y de

doña Silvia Valdivia Pavéz, cónyuge de este último, como quedó claramente establecido en fallo en alzada, siendo la suma regulada, en concepto de esta Corte excesiva, conforme a los parámetros aplicados sobre la materia por estos sentenciadores.

Décimo: Que, por aplicación de reglas de experiencia, de aquellas que permiten confirmar que el dolor o padecimiento se relacionan especialmente con el vínculo de parentesco y afectivo que se tiene o que se ha tenido con la víctima directa del o de los delitos cometidos en su persona, se estima adecuado y razonable efectuar las regulaciones que se indican a continuación para determinar el quantum, a más de los aspectos comúnmente aplicados, esto es, grado de parentesco, cercanía y relación con la víctima, por lo que estos sentenciadoras diferencian, por su puesto analizando caso a caso, lo que se otorga a la cónyuge e hijos.

Lo anterior, considerando la circunstancia que la regla general es que el mayor dolor sufrido, se configura en el momento de la detención y presencia en la época de ocurrencia de los hechos, que generalmente lo sufre el cónyuge de la víctima, quien debe continuar con su vida cuidando y protegiendo a sus hijos, llevando en sus hombros el dolor y la angustia de la pérdida de su ser amado.

En el caso de los hijos, por supuesto que existe un daño que debe ser reparado, pero su cuantificación monetaria, se estima debe ser menor que la que corresponde a su madre.

Undécimo: Que, de acuerdo a lo anterior, y considerando los parámetros establecidos en la sentencia de primer grado y lo dicho precedentemente, se fija en \$80.000.000 (ochenta millones de pesos) la indemnización que corresponde a la cónyuge de la víctima.

Respecto de los hijos, el monto a pagar a cada uno de ellos, se regula en suma de \$60.000.000 (sesenta millones de pesos).

Duodécimo: Que, dilucidado lo anterior, corresponde analizar la situación particular del demandante don David Chávez Valdivia, respecto del que no fue acogida la acción interpuesta.

En el caso del señor Chávez Valdivia, debe consignarse que él es hijo de la cónyuge de la víctima, y que al momento de contraer matrimonio don Juan Carlos Fierro con doña Silvia Valdivia Pávez, esto es, el año 1969, tenía siete años. Fue incorporado como un hijo al hogar común y conocido por todos quienes les conocieron, como hijo de la pareja, recibiendo el mismo trato que sus hermanos por la víctima, hasta el momento de su fallecimiento.

De ello dan cuenta los documentos acompañados al proceso que indican que David Chávez Valdivia aparecía como carga familiar de don Juan Carlos Díaz Fierro, así Oficio Ordinario N°97 del IPS de 30 de mayo de 2018, de fojas 304 y siguientes.

Por otra parte, el actor figuraba como beneficiario, junto a sus hermanos, de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, sindicada a los beneficiarios como hijos, en ellos estaban reconocidos David, de 11 años a la época, Carlos, de 2 años y Alex de 4 años.

Por otra parte de la testimonial rendida en autos, resulta que quienes depusieron señalaron conocer a todos los actores, y el daño que les provocó el homicidio de su padre y cónyuge. Por otra parte, refieren que David era considerado socialmente como hijo de la víctima.

De la prueba rendida, se colige que don David Chávez Valdivia, vivió como hijo de don Juan Carlos Díaz Fierro y sufrió por la pérdida de quien, en los hechos, era su padre, padecimientos similares a aquellos soportados por su madre y hermanos de simple conjunción.

Conforme lo dicho, estos sentenciadores estiman que el actor tiene derecho a la indemnización que reclama, la que se regulará en el mismo monto que la de sus hermanos.

Décimo tercero: Que, el tribunal a quo dispuso que las sumas ordenadas pagar lo sería reajustadas según la variación experimentada por el IPC entre la fecha de la notificación de la demanda y su pago efectivo, más los intereses corrientes para operaciones reajustables entre la fecha del fallo y su pago efectivo, lo que no fue impugnado por las partes, por lo que se mantendrá dicha decisión.

Por estas consideraciones y lo previsto en los artículos 186 y siguientes, del Código de Procedimiento Civil, se declara:

1.- **Se revoca, sin costas**, la sentencia de cinco de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-3460-2014, en la parte que rechazó la demanda del actor David Chávez Valdivia y en su lugar se decide que se la acoge, debiendo la demandada pagar a título de indemnización por daño moral la suma de \$60.000.000 (sesenta millones de pesos) con los reajustes e intereses determinados para el pago de las indemnizaciones de su madre y hermanos.

2.- **Se confirma en lo demás apelado, sin costas**, el referido fallo, con declaración que se eleva a \$80.000.000 (ochenta millones) la indemnización por daño moral que el Fisco de Chile deberá pagar a doña Silvia de las Mercedes Valdivia Pérez y se rebaja a \$60.000.000 (sesenta millones) la indemnización que deberá pagarse a don Carlos Alberto Díaz Valdivia y don Alex Marcelo Díaz Valdivia.

Las sumas ordenadas pagar, lo serán con los reajustes e intereses de la manera dispuesta en la parte final del considerando vigésimo segundo de la sentencia en alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redactó la Ministra señora María Soledad Melo Labra.

El Abogado Integrante señor Patricio Carvajal, no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por haber cesado sus funciones.

Civil Rol N° 11439-2019.

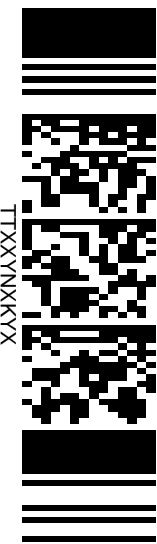




TTXXNNKKXX

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Maria Soledad Melo L. y Ministro Suplente Pedro Pablo Advis M. Santiago, dieciséis de marzo de dos mil veintidós.

En Santiago, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.